

Izquierda y política en la agenda neoliberal venezolana

Steve Ellner

Steve Ellner: profesor de Historia Económica en la Universidad de Oriente (Anzoátegui, Venezuela); autor de varios libros y artículos sobre historia y política venezolanas, entre ellos *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático, 1958-1994*, Tropvkos, Caracas, 1995.

Palabras clave: neoliberalismo, izquierda, sistema político, Chávez, Venezuela.

Resumen:

Con la aplicación del programa neoliberal durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), la discusión pública sobre las privatizaciones se centró en algunos términos como beneficios laborales, normas ambientales y precio base. La candidatura del comandante Hugo Chávez para las elecciones presidenciales de 1998 ha retomado la posición izquierdista tradicional de definir la industria básica como coto del Estado. El programa electoral de Chávez está enfrentado a tres contrincantes independientes que adoptan un discurso neoliberal. La consolidación del paradigma chavista ha reinstalado saludablemente en la izquierda venezolana temas y propuestas que parecían olvidadas.

Durante la década de los 90, partidos políticos venezolanos como Acción Democrática (AD), la Causa R y el Movimiento al Socialismo (MAS), asumieron por momentos posiciones críticas con respecto al neoliberalismo. Pero lejos de ser consecuentes, en cuestiones económicas han variado considerablemente¹. Además, frente al ferviente apoyo del neoliberalismo a las privatizaciones masivas, estos partidos no han logrado definir los términos o diseñar una estrategia para la venta de compañías públicas. En cambio, el rechazo popular a las políticas neoliberales ha sido más contundente. El repudio se puso en evidencia con varios acontecimientos notorios. Los disturbios populares de la semana del 27 de febrero de 1989 son un claro ejemplo de ello. Estallaron inmediatamente después del anuncio, por parte del recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, de un programa neoliberal que era la antítesis de lo que el pueblo había escuchado como promesa durante su campaña electoral. Las manifestaciones callejeras de 1992 y 1993 para sacar al presidente Pérez tuvieron como principal bandera la

¹ De hecho, esa inconstancia ha llevado a algunos politólogos a afirmar exageradamente que la política venezolana se centra sólo en personalidades y no en posiciones de fondo. Entre los defensores de esta posición se encuentra Michael Coppedge: *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partiararchy and Factionalism in Venezuela*, Stanford, 1994.

oposición al «paquete económico», término peyorativo para su política económica neoliberal.

El triunfo de Rafael Caldera en las elecciones de 1993 reflejó igualmente lo extenso del sentimiento antineoliberal en el país, tal como sucede hoy con el sorprendente ascenso de la candidatura del comandante retirado Hugo Chávez en la campaña presidencial de 1998. En su «Carta de Intención al Pueblo de Venezuela», publicada poco antes de las elecciones de 1993, Caldera se comprometía a evitar la privatización masiva y a analizar, en cambio, «las circunstancias de cada caso y su verdadera necesidad o conveniencia». El programa de gobierno también reclamaba la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cuanto constituía «una carga injusta sobre los consumidores de menores recursos». Otra parte del programa con implicaciones radicales era su promesa de «poner especial interés en el desarrollo del mercado nacional» y renegociar enérgicamente la deuda externa y llevar el asunto a la arena internacional.

Una vez electo para el periodo 1994-1999, Caldera puso en práctica su «Programa de Estabilización y Recuperación Económica», ideado para servir de puente entre el esquema neoliberal de Pérez y un nuevo modelo de desarrollo económico que se incorporaría el Noveno Plan de la Nación.

De hecho, los masistas alabaron el programa porque apuntaba en la dirección de una muy necesaria «síntesis entre la decisión transformadora y las complejidades del mundo actual, entre el ideal socialista y la perennidad de la libertad»². Al mismo tiempo los neoliberales lo criticaron porque persistía en los controles de cambio, precios, tasas de interés y movimiento de capital, y amenazaba con un retorno al proteccionismo –so pretexto de antidumping– como medidas provisionales. También atacaron fuertemente a Caldera por posponer el aumento de los precios de la gasolina, una postergación que olía a «populismo económico». No solo la economía se enfrió, sino que para 1996 la inflación alcanzó el 103%. El argumento de que el país no tenía otra salida que recurrir a las fórmulas neoliberales sonaba a cosa conocida.

Más tarde, Caldera reaccionó ante las dificultades económicas y políticas de la primera mitad de su mandato dando marcha atrás y adoptando un programa estilo FMI encarnado en la «Agenda Venezuela».

En 1989, Pérez –como Caldera en 1996– había olvidado las políticas intervencionistas de su primer gobierno (1974-1979), y aludiendo a la devastación económica que Alan García dejara en Perú al enfrentarse al FMI, decía que el neoliberalismo era el único camino a seguir porque «no había alternativas». Sin embargo, las dificultades económicas que enfrentó Caldera en 1994 y 1995 no necesariamente son imputables al hecho de que Venezuela no se guiara por el

² Alberto Lovera: «Reajuste del ajuste» en *El Ojo del Huracán*, 7/12/1994, p. 2; Fernando Rodríguez: «El futuro y el MAS» en *El Ojo del Huracán*, 1/7/1994.

imperativo de insertarse en la economía global de conformidad con el esquema neoliberal. Una explicación alternativa –aunque parcial– de las dificultades económicas es la crisis bancaria que recibió a Caldera apenas asumió, y que llevó al gobierno a auxiliar a cinco de los diez mayores bancos del país con una suma de 6.000 millones de dólares. La inestabilidad de las instituciones financieras se relacionaba directamente con la revocación de los controles financieros bajo el gobierno neoliberal de Pérez.

Las desventuras políticas de Caldera durante esos años quedaron a la vista en las elecciones estatales y municipales de 1995, cuando su partido, Convergencia ganó solamente en uno de los 22 estados. En contraste, los masistas obtuvieron dos gobernaciones claves, Lara y Aragua, además de Portuguesa y Sucre Al año siguiente. Caldera elegiría al MAS como su principal soporte al otorgarle tres cargos ministeriales. Uno de ellos fue para el teórico izquierdista Teodoro Petkoff (ministro de Cordiplan); otro líder histórico del partido, Pompeyo Márquez, recibió el Ministerio de Fronteras.

Al poco tiempo de aceptar el cargo, Petkoff recorrió el país visitando seccionales del MAS para explicar su apoyo a la Agenda Venezuela pese a su parecido con el «paquete económico» de Pérez. Petkoff diría que desde fines de 1994 el MAS solicitaba el levantamiento de los controles, particularmente el de cambio, y que eran necesarias otras medidas duras para corregir los abusos producidos por más de una década de populismo de AD-Copei, por una parte, y de neoliberalismo de Pérez, por otra. El flamante ministro utilizó tres argumentos básicos como principal formulador y portavoz de las políticas económicas del gobierno. En primer lugar afirmó que la hiperinflación era una bomba de tiempo que amenazaba la democracia y que por lo tanto había que controlarla a cualquier precio. En segundo lugar, Caldera tenía un mayor compromiso con los programas sociales –basado en sus principios socialcristianos– que Carlos Andrés Pérez, cuyas asignaciones a los sectores no privilegiados se malgastaron debido a las presiones clientelares.

Y en tercer lugar. Caldera era políticamente más astuto que Pérez, cuya fe ciega en su carisma lo llevó a imponer de manera precipitada políticas de «shock», desdeñando la ardua tarea de lograr un consenso de conformidad con la tradición democrática del país. La manifestación más importante de esa búsqueda de consenso fue la creación de la Comisión Tripartita, compuesta por representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que reformó el sistema de seguridad social e introdujo aumentos del salario mínimo –una iniciativa que antes partía del gobierno o del Congreso. Debe decirse que los partidarios de Caldera no pierden tiempo en señalar que el papel de la Comisión Tripartita en la concepción de leyes de importancia ha sido señalado como un ejemplo a seguir por otras naciones a escala mundial³.

³ Enrique Ochoa Antich: *¿Adiós al MAS?*, Caracas, 1997, p. 205.

Aunque Petkoff es el principal vocero gubernamental de la Agenda Venezuela, de inspiración neoliberal, también ha expuesto planteos de izquierda a favor de un Estado fuerte y eficaz y ha cuestionado la infalibilidad y viabilidad de los mecanismos de mercado. En su libro *Por qué hago lo que hago*, Petkoff defiende su decisión de entrar en el gobierno de Caldera, rechazando el «utopismo» que tradicionalmente ha impedido que los izquierdistas se percaten de los problemas reales de la sociedad: en este caso, la necesidad de defender la democracia del país.

Al justificar la privatización masiva –piedra angular de la Agenda Venezuela–, Petkoff invoca el eslogan asociado con los socialdemócratas alemanes: «Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario». Específicamente, está a favor de que la petrolera Pdvsa y la eléctrica Edelca, que han sido bien administradas, sigan siendo propiedad del Estado, pero aboga por la privatización de todos los demás sectores. En contraste con el discurso neoliberal, que se opone a la intervención del gobierno en la economía, Petkoff dice que liberar al Estado de la carga de subsidiar empresas estatales ineficientes le permitirá al mismo inyectarle dinero a áreas claves del crecimiento económico, en particular el desarrollo de recursos humanos⁴. La mayor laguna del libro es que no describe los criterios bajo los cuales deberían venderse las industrias básicas –acero, hierro y aluminio– y sectores estratégicos –telecomunicaciones. La definición de los términos de las privatizaciones, en particular de la adquisición de los sectores claves por compañías extranjeras, es actualmente uno de los asuntos más apremiantes para la izquierda latinoamericana. Precisar esos requisitos es necesario para determinar la validez de la autoidentificación de Petkoff como un vocero de políticas «izquierdistas».

Posiciones neoliberales e izquierdistas en torno a la privatización

Venezuela tardó en llegar al modelo neoliberal. De hecho, antes de que Pérez asumiera su segunda presidencia ni siquiera la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) promovía la idea. La prolongada resistencia a esas políticas se debió a su condición como país exportador de petróleo, con suficientes ingresos para subsidiar generosamente tanto a los empresarios como a los sectores no privilegiados, y a la fuerza histórica de la social democracia representada por AD, que mantuvo una posición hegemónica en los sectores obreros y campesinos. La oposición inicial a la primera ola de privatizaciones –que incluyó la empresa de telecomunicaciones (Cantv) en 1991, seguida por la aerolínea estatal Viasa y la descentralización y virtual privatización del sistema portuario– desapareció paulatinamente una vez que se trató de hechos cumplidos. Esas privatizaciones, en particular la de teléfonos, que sirvió de muestra para el proceso, preparó a la opinión pública para el programa de privatización masiva prevista en la Agenda Venezuela.

⁴ Teodoro Petkoff: *Por qué hago lo que hago*, Alfadil, Caracas, 1997, pp. 62-74.

Desde 1992 hasta el lanzamiento de la candidatura presidencial de Hugo Chávez para las elecciones de 1998, la oposición a la privatización de las compañías del Estado –con la excepción de la industria petrolera– no fue un polo de referencia para la opinión pública nacional. De los principales partidos políticos venezolanos, la Causa R y Patria Para Todos (PPT, un grupo izquierdista separado de la Causa R) eran los que estaban ubicados más hacia la izquierda en el espectro político. Sin embargo, ni siquiera esos partidos descartaban completamente la privatización. El PPT, por ejemplo, sostenía que la venta de la industria pesada en la región de Guayana debía aguardar hasta la aprobación de un plan de amplia cobertura que definiera y salvaguardara los intereses de largo plazo para la nación.

Los principales actores del debate sobre la privatización han seguido dos estrategias opuestas –a la de los neoliberales radicales y a la de los «no dogmáticos»– con importantes implicaciones para los trabajadores. La posición no dogmática, puede catalogarse de «izquierdista». Se define por su rechazo a la estrategia neoliberal, y por lo tanto se ilustra mejor con una discusión de las posiciones neoliberales sobre la privatización.

Para los neoliberales, en vez del precio «base» (precio mínimo establecido por el gobierno), le correspondería al mercado determinar el valor definitivo de las empresas a privatizar. Aceptan que se fije un precio base, pero sólo para evitar recelos de la opinión pública en cuanto al manejo del proceso, e insisten en que la cantidad (en palabras del miembro del gabinete de Carlos Andrés Pérez a cargo de la privatización) sea «la menor que el gobierno esté dispuesto a aceptar para atraer... el mayor número de ofertas»⁵.

Los neoliberales criticaron duramente el gobierno de Caldera cuando se declararon desiertas las licitaciones para la privatización de la aerolínea Aeropostal en 1994, y de las empresas del aluminio en 1998. En el primer caso, culparon a Abdón Vivas Terán, en ese entonces de tendencia izquierdista y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), de intentar sabotear el proceso fijando el precio base en 62 millones de dólares, 22 por encima del valor estimado de la empresa. Inmediatamente después del fracaso de la licitación, Caldera relevó a Vivas Terán. En el segundo caso, casi-neoliberales como el dos veces candidato presidencial Claudio Fermín, señalaron que el precio base de 2.100 millones de dólares era excesivo y que el retiro de empresas multinacionales como Alcoa y Reynolds, entre otras, era una prueba de que el gobierno no tenía un verdadero interés en la privatización.

Los neoliberales también piden la desregulación y la modificación de las leyes laborales, a fin de aumentar la eficiencia laboral antes de la privatización, y que se reduzcan los beneficios del personal al nivel de los de otros países, de acuerdo con las exigencias globales. El avance más trascendental en ese sentido fue la

⁵ Gerver Torres: ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?: la privatización en Venezuela, Caracas, 1994, pp.120,125-127.

reforma en 1997 del sistema de prestaciones sociales, un régimen que se remontaba a la Ley del Trabajo de 1936, que tuvo como coautor a un joven Rafael Caldera de veinte años. Dos aspectos de la reforma de 1997 minaban objetivos básicos de la ley vigente. En primer lugar, se eliminó el cálculo retroactivo de la indemnización por despido, que servía como garantía contra la inflación. En segundo lugar, la obligación del patrón de pagarle al trabajador un mes de salario por cada año de antigüedad en caso de despido injustificado, con una cláusula destinada a disuadir a los patronos de los despidos y proporcionarle al trabajador un cierto grado de estabilidad laboral, quedó limitada ahora a cinco meses de salarios.

Algunos neoliberales, inspirados por un sindicalismo estilo norteamericano, señalan que la privatización transforma el movimiento obrero al cortar los vínculos con el Estado y los partidos políticos, que fomentan el clientelismo y la corrupción. Eduardo Fernández, quien aspiraba a representar al partido Copei en las elecciones presidenciales de 1998, expresó ese punto de vista cuando le dijo a sindicalistas copeyanos que debían seguir un rumbo «agresivo», pero evitando vinculaciones partidistas y absteniéndose de «ir a las puertas de Miraflores a implorarle al gobierno que decrete aumentos salariales artificiales». Añadió que los trabajadores no tenían nada que temer de los avances tecnológicos y de la privatización. A la larga esos cambios les favorecerían, por lo tanto los líderes sindicales no debían considerar automáticamente todo despido como motivado por la codicia empresarial; lo que los trabajadores perderían en la indemnización por despido, y otros beneficios legales, producto del paternalismo del Estado sería más que compensado por los aumentos salariales⁶.

Irónicamente, algunos de los neoliberales radicales expresaron simpatía por el sindicalismo combativo practicado por ciertos movimientos con un discurso antipartidista y anticlientelista, como la Causa R, que desafiaba abiertamente a la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) dominada por AD. Estos neoliberales recomendaban a los ejecutivos empresariales que «estimularan» un sindicalismo al estilo Causa R. Consideraban que ese tipo de movimiento obrero rinde más cuenta a las bases, sobre todo en cuestiones de finanzas sindicales, y que rechaza la práctica –conocida como «costa contractual»– de presionar a las empresas para suscribir gastos sindicales, al tiempo que atribuye menos importancia a las cláusulas sindicales en el área de contratación⁷.

La posición de los neoliberales radicales representa un caso extremo, pero en la práctica muchos de los que se identifican con el neoliberalismo no siguen un enfoque tan rígido. Algunos aceptan que el gobierno supervise y fije pautas para empresas recién privatizadas en lo que se refiere a inversiones y transferencia tecnológica, particularmente en el área de los servicios públicos. Sin embargo, no llegan al extremo de aceptar metas de cumplimiento obligatorio impuestas por el

⁶ *El Diario de Caracas*, 16/6/91, p. 24.

⁷ Mary Mogollón: «El sindicalismo en Venezuela» en *Veneconomía*, 4/1994, pp. 9-11.

Estado, ni una regulación estatal continua. Criticaron al Congreso por haber citado en numerosas ocasiones al entonces presidente de la recién privatizada Cantv para interrogarlo sobre ciertas políticas de los nuevos dueños de la compañía.

La posición flexible, «no dogmática», está a favor de establecer una serie de requisitos y condiciones que debe cumplir el capital foráneo, en vez de confiar incondicionalmente en los mecanismos de mercado. De hecho, antes del triunfo de Caldera en 1993, Petkoff defendió esa política calificándola de «pragmática». Se opuso a la venta masiva de las empresas estatales, al mismo tiempo que exigió al gobierno que mantuviera una presencia efectiva en las industrias que fueran privatizadas⁸.

El enfoque no dogmático forma parte de una estrategia tradicional basada en demandas progresivas, donde el gobierno venezolano obligaba a las compañías petroleras extranjeras a pagar impuestos paulatinamente más altos, a contratar venezolanos para puestos con conocimientos especializados y a cumplir medidas conservacionistas, en especial respecto a la quema de gas. La lucha de medio siglo que puso de manifiesto el nacionalismo económico y condujo a una participación cada vez más activa en las decisiones de la industria, culminó con la nacionalización del petróleo en 1976. Los más firmes defensores de la estrategia eran seguidores de la socialdemocracia (en el caso de AD) y del marxismo; así que, puesta en el contexto histórico, la posición «no dogmática» sobre la privatización y la política económica puede catalogarse como «izquierdista».

Sin embargo, a diferencia de los socialdemócratas y marxistas de ayer (quienes plantearon la vía pacífica y no-pacífica al socialismo, respectivamente) los pragmáticos de hoy no tienen una visión o una estrategia a largo plazo. Un ejemplo es el planteo de congresistas socialdemócratas y de otras tendencias para que el Estado venezolano mantuviera una «acción dorada» en las empresas mixtas bajo el esquema de la apertura petrolera. Nunca ha sido claro si el objetivo de la acción dorada es asegurar al Estado venezolano el derecho de veto en una decisión de mucha trascendencia, como en caso de guerra (situación afortunadamente poco probable), o si la idea es participar en las decisiones diarias de la empresa.

La diferencia más importante entre los neoliberales y los no dogmáticos es que estos últimos no ven la privatización como un imperativo. Su disposición a considerar otras opciones diferenciaba claramente a las dos corrientes durante la discusión sobre la privatización de las industrias del acero (Sidor) y el aluminio. Cuando en marzo de 1998 fracasó la subasta de la Corporación Aluminios de Venezuela, líderes sindicales y opositores del gobierno pidieron que se consideraran arreglos alternativos, incluyendo la creación de compañías mixtas y «asociaciones estratégicas» con el capital privado, lo cual constituía una modalidad nueva en la industria petrolera.

⁸ T. Petkoff: «Privatización: no existe ley que norme el proceso» en *Punto*, 29/11/1990, p. 3.

La revista pro-adeca *Zeta* asumió esta posición y trató de convencer al candidato presidencial de AD, Luis Alfaro Uceró, de que se manifestara sobre el asunto, para quitarle piso a la candidatura de Chávez. La revista señalaba que los complejos del aluminio se le habían entregado en perfectas condiciones a Pérez al inicio de su segundo mandato, insinuando que el reciente deterioro había sido intencional para presionar por la privatización. Con el argumento de que el apoyo a la privatización no puede ser «incondicional» la revista advertía que los compradores potenciales habían endurecido sus demandas: un periodo de gracia de dos años para el pago de la deuda de la corporación el despido de mil trabajadores antes de la privatización, concesiones para la explotación de bauxita durante 20 años más, mayor «flexibilidad» en cuanto a los «pasivos ambientales», y precios especiales para la electricidad de parte de la compañía estatal Edelca⁹.

El actual presidente del FIV, Alberto Poletto, a cargo del proceso de privatización, intentó refutar la posición no dogmática. Conforme a la estrategia neoliberal que asignaba máxima prioridad a la privatización, Poletto argumentó que el continuo deterioro de la Corporación Aluminios de Venezuela exigía una solución inmediata. Se oponía a otras opciones de la privatización, porque tendrían que ser llevadas al congreso para su aprobación. Poletto afirmaba también que la privatización era la única modalidad que permitía la inamovilidad laboral –nunca se aceptó la propuesta sindical de seis meses de estabilidad numérica–, la venta de 20% de las acciones de la compañía a los trabajadores y otros beneficios laborales de la propuesta original que el FIV seguía defendiendo.

Las comisiones del Congreso han sido un escenario clave para la articulación de la posición no dogmática. Congresistas de todos los partidos, incluyendo el MAS, AD y –en menor grado– Copei, han cuestionado seriamente varios aspectos de los programas de privatización de Pérez y Caldera. En el Congreso Luis Raúl Matos Azocar (entonces presidente de la Comisión para las Privatizaciones) junto con parlamentarios del MAS y de la Causa R plantearon serias objeciones a la privatización de la Cantv en 1991 y a la Ley de Privatización que introdujo al mismo tiempo Pérez.

Durante el gobierno de Caldera el debate parlamentario detuvo la privatización de las empresas de la CVG por tanto tiempo que poco antes de la venta de Sidor los círculos empresariales extranjeros casi descartaron la posibilidad de que la industria básica fuera privatizada antes de las elecciones de 1998¹⁰. En esencia el Ejecutivo ha insistido más que el Congreso en una privatización masiva y otras políticas neoliberales. La propuesta de Chávez de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente no toma en cuenta esas diferencias. El planteo complace a la opinión pública y a ciertos sectores conservadores vinculados al mundo empresarial, que usan a los partidos políticos venezolanos y al Congreso como chivos expiatorios de las dificultades del país.

⁹ Gonzalo Galván: La nación, AD y las transnacionales» en *Zeta* 2-14/4/1998, p. 22.

¹⁰ *The Economist*, 22/3/1997, p.52

La candidatura del comandante Chávez

Durante los años de la cárcel transcurridos después de su sublevación el 4 de febrero de 1992, Chávez y sus seguidores militares comenzaron a establecer contactos con civiles, incluyendo a pequeños grupos izquierdistas. Al principio su organización política abogaba por el abstencionismo, pero en una convención extraordinaria en abril de 1997 optó por participar en las elecciones nacionales de 1998.

Al comienzo de su campaña se puso en tela de juicio el compromiso de Chávez con la democracia, en gran parte por miedo a lo desconocido o «un salto al vacío» (palabras usadas con frecuencia por sus rivales). Sus adversarios explotaron varias características de su movimiento. Su lenguaje y algunos de sus planteamientos les permitieron despertar dudas sobre su dedicación a la democracia. Por ejemplo, su propuesta sobre una Asamblea Constituyente para sustituir al Congreso generó temores de que eso le permitiera arrogarse poderes ilimitados, sobre todo porque la Constitución venezolana no contempla esa opción. Por otra parte, para algunos resultaba además preocupante el hecho de que a los militares retirados –en especial a los que participaron en los dos intentos de golpe de Estado de 1992– se les diera una posición privilegiada en la estructura de Chávez a nivel nacional y, en menor grado, a nivel regional.

En el transcurso de la campaña, la agrupación de Chávez (Movimiento Quinta República, MVR) ha ido moderando su retórica y sus posiciones, sin abandonar su actitud radical. Al principio el apoyo a su candidatura se limitaba al partido de tendencia izquierdista PPT, al Partido Comunista (PCV), mucho más pequeño, y a varios grupos de ultraizquierda incluyendo al ex-guerrillero Bandera Roja, más tarde rechazado por el MVR. El inesperado respaldo del MAS en su convención de junio ayudó a atenuar su imagen de rebelde intransigente y a desechar las dudas en cuanto a su compromiso con el sistema democrático. Poco antes de la convención ningún líder nacional del MAS apoyaba la candidatura de Chávez y sólo uno, Freddy Díaz –luego designado jefe de campaña del MAS a nivel nacional– sostenía vigorosamente que el partido no debía descartar esa opción. Otros líderes del partido estaban divididos entre los tres rivales independientes de Chávez: Irene Sáez –apoyada por Copei y, hasta julio, por la Causa R–, Henrique Salas Römer –ex-gobernador de Carabobo– y Claudio Fermín –anterior alcalde de Caracas. Estos tres candidatos alcanzaron prominencia nacional como alcaldes o gobernadores, comparten el discurso del MAS que hace énfasis en la descentralización, y en varias medidas defienden el neoliberalismo.

Varios factores explican ese cambio abrupto en el MAS. El más importante quizá sea que Chávez cuenta con un respaldo considerable entre las bases del partido. Según una encuesta realizada por el politólogo estadounidense David Myers, más del 40% de los miembros estaba a favor de su candidatura. De hecho, Leopoldo Puchi, que antes apoyaba a Irene, reconoció que la base le había impuesto al partido la candidatura de Chávez. En segundo lugar, Puchi y otros líderes del MAS decidieron que la posición de centroizquierda en el espectro político, abandonada

por el partido al defender la Agenda Venezuela, era un terreno fértil y con pocos competidores.

Finalmente, la decisión de Puchi de retirarle su apoyo a Irene coincidió con la salida del MAS de la «triple alianza» anti-AD, que agrupaba también a Copei y la Causa R, y que parecía un útil trampolín para la candidatura de Sáez. La alianza fue creada para combatir el clientelismo y la corrupción simbolizada por AD, pero dejaba de lado los asuntos socioeconómicos. Con el respaldo a Chávez, la dirigencia nacional del MAS desechó las alianzas municipales y estatales con AD que en el pasado les habían facilitado triunfos en varias partes del país.

Esta candidatura chavista contribuyó a poner los asuntos de política económica en el centro del debate nacional. Las posiciones críticas y progresistas de un puñado de parlamentarios de partidos tales como el MAS –en el caso del ex-presidente partidario Gustavo Márquez– y AD –en el caso de Matos Azocar– con respecto a la privatización no contaban con la defensa de sus respectivos partidos, y ni siquiera necesariamente con su aprobación¹¹. Más aún, los asuntos que planteaban no se discutían de manera interna.

Chávez retomó la defensa del artículo 97 de la Constitución, que reserva el control de las industrias básicas para el Estado, una posición asociada históricamente con la izquierda y los socialdemócratas. El MVR declara fuera del alcance del capital privado los sectores estratégicos, incluyendo la tecnología militar. El programa le asigna las instituciones financieras y los bienes de consumo básicos al capital «mixto» con una fuerte participación y regulación del Estado, mientras la producción de bienes no esenciales se reserva para el sector privado.

En forma similar, la propuesta chavista para la renegociación de la parte no estructurada de la deuda externa, y una posible «moratoria negociada», replantea proposiciones de los años 80 que durante la presente década han sido excluidas, desafortunadamente, del debate público en casi toda América Latina. Varias posiciones de Chávez y sus partidarios son contradictorias o se prestan a diversas interpretaciones. Puchi (MAS), por ejemplo, deja abierta la posibilidad de que el Congreso continúe sus funciones por un periodo indefinido después de convocada la Asamblea Constituyente, mientras otras declaraciones de miembros de la campaña dejan en claro que una institución reemplazará a la otra. Además, no se sabe si la propuesta chavista sobre una moratoria de la deuda externa no estructurada será por mutuo acuerdo, como él lo plantea. Dada la insistencia de Chávez en que la carga de la deuda resulta abrumadora, como presidente podría optar por una acción unilateral. Sus socios en el PPT han hecho una fuerte campaña en favor del desconocimiento del componente ilegal de la deuda.

Finalmente la promesa de Chávez de reconocer los contratos ya firmados para la privatización de la industria básica, y para la participación privada en la industria petrolera, tampoco es muy clara. A pesar de esa garantía, Chávez advierte que los

¹¹ Víctor Hugo D'Paola: «La tragedia de la dirección masista», folleto, 1997.

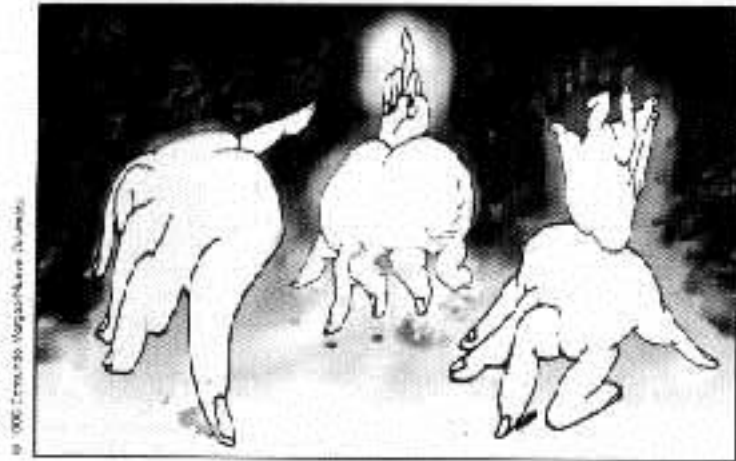
contratos serán examinados a fondo y si se detectan cláusulas ilegales serán modificados. En otras oportunidades ha señalado que la devastación ecológica y el empleo de trabajadores extranjeros en lugar de venezolanos también podrían ser motivo de revisión. De hecho, Pablo Medina, jefe máximo del PPT, afirmó que la privatización de la Cantv en sí es ilegal y que por lo tanto debería revocarse¹².

El ataque verbal de Chávez al sistema político de la nación, conocido como «partidocracia» –los partidos dominan el gobierno y la sociedad civil– se presta a acusaciones de autoritarismo, aspecto que sus cuatro principales contendores explotan al máximo. En contraste con el discurso antipartidista de Chávez, que llega a su máxima expresión con la propuesta de suprimir el Congreso, en otros países latinoamericanos tales como México, Brasil y Argentina partidos políticos bien establecidos han sido el vehículo para un resurgimiento de la izquierda en años recientes.

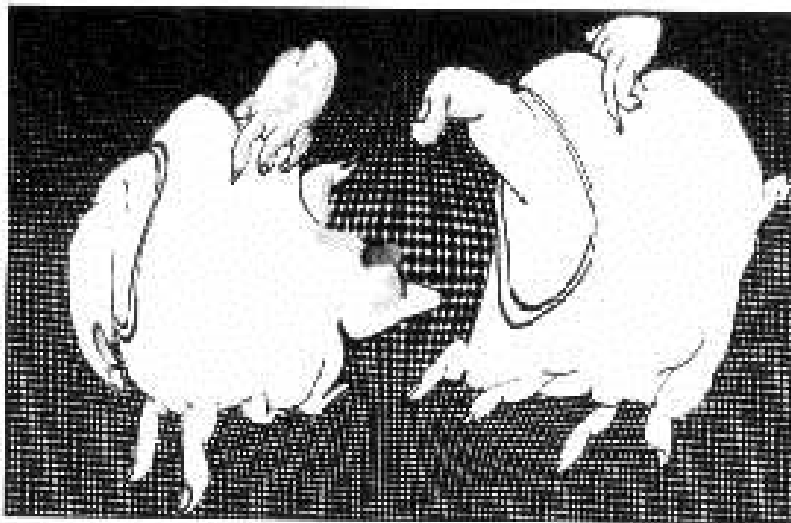
Las relaciones de Chávez con el MAS pueden describirse como simbióticas y al mismo tiempo frágiles. El énfasis del MAS en la democracia y la descentralización debe ayudar a disipar la idea de que Chávez defiende la tradición centralizada del país. Al mismo tiempo, la crítica chavista al neoliberalismo debe forzar al MAS a reexaminar sus posiciones en materia de política económica y posiblemente a formular una autocrítica sobre el respaldo del partido a la Agenda Venezuela. Dada la abierta identificación de muchos de los líderes masistas –como el presidente partidario Felipe Mujica– con el neoliberalismo, esa introspección y rectificación se vuelven aún más apremiantes.

Si Chávez influye en los izquierdistas para que examinen, discutan y reformulen sus posiciones sobre política económica, y en lo particular sobre las privatizaciones, su candidatura tendrá un papel constructivo, independientemente de los resultados de las elecciones. Desde que abandonó su defensa a ultranza del sector estatal, lo que se consideraba un instrumento para alcanzar la anhelada meta del socialismo, la izquierda no ha logrado fijar criterios para la relación que debe existir entre el Estado y los sectores productivos de la economía. En el mejor de los casos, la política de la izquierda fue lo que Petkoff –antes del viraje del MAS hacia el centro durante el gobierno de Caldera– llamó con aprobación una política «pragmática», que consistía en maximizar los beneficios del Estado pero sin establecer una estrategia viable ni metas de largo plazo. Una tarea fundamental para la izquierda venezolana y del resto de América Latina es ir más allá del pragmatismo. El intento de Chávez de definir áreas reservadas para el capital estatal, y su insistencia en revisar contratos con el sector privado para detectar violaciones de la legislación actual y de normas ecológicas y laborales, apunta en la dirección correcta.

¹² Pablo Medina, entrevista personal, Caracas, 22 de junio de 1998.



© 2006 Ernesto Vargas/Alumia, Buenos Aires



© 2006 Ernesto Vargas/Alumia, Buenos Aires

Las ilustraciones acompañaron al presente artículo en la edición impresa de la revista